



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

23-104

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **JOHN JAIRO TEJADA VELEZ.**
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E. Y PORVENIR S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-003-2019-00592-01.
Tema: ineficacia traslado.
Decisión: **CONFIRMA, REVOCA Y ADICIONA SENTENCIA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrado **MARIA NANCY GARCIA GARCIA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones E.I.C.E. y Porvenir S.A. contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 032** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. **SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES.**
- 1.1. **LO PRETENDIDO.**

Solicitó el demandante, que se declare la **NULIDAD y/o INEFICACIA** del traslado al RAIS, considerando valida, vigente y sin solución de continuidad su afiliación al RPM. Que se condene a Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones todos los aportes y rendimientos financieros, sin ningún descuento por cuota de administración. Que se condene al pago de la pensión de vejez en caso de que el accionante cumpla los requisitos para la fecha del fallo. De forma subsidiaria solicitó se declare el derecho y se condene a Porvenir S.A. a reconocer a título de indemnización de perjuicios, la mesada pensional del RPM una vez el demandante acredite los requisitos para el efecto. Finalmente solicitó se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 29 de mayo de 1959, por lo que a la fecha de presentación de la demanda contaba con 60 años de edad.
- ✓ Que se afilió inicialmente al ISS, desde el 4 de octubre de 1993, hasta julio del 2000, cotizando un total de 334.14 semanas.
- ✓ Que el 1 de noviembre del 2000, inició sus cotizaciones al RAIS administrado por Porvenir S.A.
- ✓ Que al momento del traslado, Porvenir S.A. no le brindó información clara, concisa y veraz, con respecto a las ventajas, desventajas, y consecuencias legales y económicas que tendría su cambio de régimen pensional, incumpliendo así su deber de información y buen consejo.
- ✓ Que Porvenir S.A., no le brindó reasesoría antes de cumplir los 47 años de edad(sic).
- ✓ Que solicitó el traslado de régimen ante Colpensiones, entidad que, mediante respuesta fechada a 9 de agosto de 2019 negó tal pretensión.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Porvenir S.A. se opuso a la totalidad de pretensiones; y no aceptó ningún hecho del libelo demandatorio. Frente al traslado de régimen pensional adujo que el demandante se afilió de forma informada, libre y voluntaria puesto que recibió asesoría de manera verbal, donde se le brindó la información clara, suficiente y veraz acorde a los datos suministrados por el accionante y en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha de traslado.

Colpensiones E.I.C.E. se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones; frente a los hechos, indicó que eran ciertos los relativos a la fecha de nacimiento del demandante, la afiliación al ISS, la solicitud de traslado incoada y su respuesta. Frente a los demás supuestos de facticos adujo no constarle al ser exógenos al conocimiento de la entidad.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida el 17 de abril de 2023, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín decidió:

“PRIMERO: DECLARAR que la demandada AFP PORVENIR S.A. no demostró haber cumplido con su obligación de diligencia debida de buen consejo en favor del señor JOHN JAIRO TEJADA VELEZ identificado con C.C. nro. 3.446.965, cuando este se trasladó a dicha

Administradora de Fondos de Pensiones, ni tampoco demostró que a lo largo de la afiliación de JOHN JAIRO TEJADA VELEZ a dicha entidad, esta le diera información clara, veraz y oportuna que le mostrara las circunstancias que le hicieran mas favorable permanecer en el RAIS antes que en el RPMPD.

SEGUNDO: DECLARAR que PORVENIR S.A. causó grave menoscabo, es decir disminución o limitación a la seguridad social en pensiones del demandante JOHN JAIRO TEJADA VELEZ identificado con C.C. nro. 3.446.965, cuando cumplió la edad y semanas para tener derecho a la pensión.

TERCERO: DECLARAR la responsabilidad constitucional y profesional de PORVENIR S.A en el menoscabo o perjuicio a la seguridad social en pensiones del demandante JOHN JAIRO TEJADA VELEZ.

CUARTO: DECLARAR la inaplicación constitucional (art. 53 C.P. y 272 Ley 100/93) de la pérdida del RPMPD acaecido en cabeza de JOHN JAIRO TEJADA VELEZ causado por PORVENIR S.A. De acuerdo con la inaplicación constitucional aquí declarada, también se DECLARA que el demandante JOHN JAIRO TEJADA VELEZ sigue inmersa en el RPMPD, pero a cargo de la AFP PORVENIR S.A.

QUINTO: ABSOLVER a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra, sin perjuicio de las órdenes que se le darán enseguida.

SEXTO: Consecuencial a las anteriores declaraciones, ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A., que dentro del mes siguiente a la fecha en que el demandante solicite por escrito la pensión de vejez, una vez éste reúna los requisitos para tener derecho a ella, le reconozca, liquide y pague dicha pensión, bajo el RPMPD. El señor JOHN JAIRO TEJADA VELEZ dentro de la carta en que solicite la pensión de vejez, deberá incluir certificado de retiro laboral.

SEPTIMO: ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A. que, dentro del mes siguiente a la fecha en que reconozca, liquide y pague la pensión de vejez bajo el RPMD en favor del demandante, solicite por escrito a COLPENSIONES, elaboración de cálculo actuarial pensional con miras a subrogación pensional. Aquí mismo se ORDENA a COLPENSIONES que dentro de los (dos meses) siguientes a la fecha en que PORVENIR S.A lo solicite por escrito, elabore dicho cálculo actuarial pensional con miras a subrogación pensional y en ese mismo lapso, dos meses, COLPENSIONES deberá presentar dicho cálculo actuarial pensional a PORVENIR S.A. A su vez esta última entidad, PORVENIR S.A., dentro del mes siguiente a la fecha en que reciba por escrito el valor del cálculo actuarial pensional de manos de COLPENSIONES, proceda a su pago real y efectivo a dicha entidad (COLPENSIONES).

OCTAVO: ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A. que hasta tanto no pague real y efectivamente el valor del cálculo actuarial pensional a COLPENSIONES, sigue obligada a

pagar la pensión de vejez bajo el RPMPD a la demandante JOHN JAIRO TEJADA VELEZ. COLPENSIONES subrogará a PORVENIR S.A. en tal obligación a partir del momento y hora en que esta última entidad pague a COLPENSIONES el valor del cálculo actuarial pensional.

NOVENO: AUTORIZAR a la AFP PORVENIR S.A a ENJUGAR parte del valor del cálculo actuarial pensional que aquí se le ordena pagar a COLPENSIONES tomando para sí, para PORVENIR S.A., los ahorros pensionales del demandante, rendimientos financieros, bono pensional y cualquier otra suma de dinero que llegue al haber de la cuenta de ahorros de este.

DÉCIMO: No prosperan las excepciones propuestas por la demandada AFP PORVENIR S.A. Prospera la excepción propuesta por COLPENSIONES de intransmisibilidad de la responsabilidad de la AFP PORVENIR S.A. a dicha entidad COLPENSIONES, pues como lo ha dicho la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL en múltiples sentencias, COLPENSIONES es un tercero en el acto jurídico de traslado y es principio constitucional que los terceros no pueden cargar con las consecuencias dañinas, con las desventajas de la celebración de un acto jurídico en el que no ha participado. Por ello se ABSOLVERÁ a COLPENSIONES de todas las pretensiones, sin perjuicio de las órdenes que aquí se le han dado.

DÉCIMO PRIMERO: COSTAS PROCESALES a favor del señor JOHN JAIRO TEJADA VELEZ y a cargo de PORVENIR S.A. Agencias en derecho \$4.640.000,00”

Dentro del término concedido por la ley, Colpensiones E.I.C.E., y Porvenir S.A. interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS.

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR.

Indicó que las consecuencias de la ineficacia de la afiliación, no pueden afectar a los terceros ajenos a dicho negocio jurídico, como lo es Colpensiones, razón por la cual al tenor del principio de la Responsabilidad, los artículos 4, 53 y 224 de la Constitución Política de Colombia, artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 720 de 1994, no puede causarse un agravio a dicha entidad pues iría en contravía de la sostenibilidad financiera y por ende, de la constitución misma, al endilgarle la obligación de aceptar el retorno automático del demandante con ocasión al perjuicio causado por una AFP, más aun cuando se considera como un tercero ajeno a esa relación jurídica, y teniendo en cuenta que las AFP no devuelven todas las sumas que obtuvieron producto de los dineros de la seguridad social. Así las cosas, si se prueba que la AFP no brindó una información veraz y oportuna, teniendo en cuenta el mencionado principio de Responsabilidad, lo que procede es declarar la inaplicación constitucional del RPM y en ese sentido, indicar que el trabajador sigue inmerso en el RPM, pero a

cargo de la administradora de fondos de pensiones del RAIS incumplida. En este orden de ideas, y respecto al deber de información a cargo de la AFP accionada, adujo que se encuentra probado en el plenario que a la parte demandante no se le brindó información transparente, veraz y oportuna, pues se demostró un perjuicio o menoscabo a su derecho a la Seguridad Social, razón por la cual, consideró procedente dejar sin efectos la afiliación al RAIS. Finalmente considero que, con base al quebrantamiento del deber de información, al demandante se le había causado un menoscabo en su derecho pensional, por lo cual ordeno a Porvenir S.A. su reconocimiento bajo los parámetros del RPM.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN.

2.2.1 PRESENTADO POR PORVENIR S.A.

Interpuso recurso de apelación solicitando se revoque de forma total la providencia, considerando que en el proceso hubo una extralimitación de las facultades ultra y extra petita del a quo, ya que con la sentencia se abordó el tema de unos perjuicios que no fueron pretendidos en el proceso, aunado a que el accionante en ningún momento probó los 3 elementos constitutivos de la responsabilidad civil, la cual se declaró en la sentencia.

De otro lado, indicó que se desconoció que el legislador ha configurado dos sistemas pensionales en Colombia, los cuales son totalmente excluyentes, por lo que, no es posible condenar a Porvenir a pagar una pensión de vejez liquidada conforme al RPM ya que no es la normatividad bajo la cual se encuentra inmersa la AFP.

Resaltó que, en el proceso no existían razones fácticas o jurídicas para configurar las declaraciones realizadas, por cuanto la afiliación del actor al RAIS se dio de forma libre y voluntaria, siendo decisión propia la de permanecer en el RAIS, por lo que no es dable reconocer el acto jurídico celebrado hace tantos años.

Finalmente, destacó que la AFP siempre ha obrado de buena fe colocando los canales de comunicación al servicio del actor, sin que este haya hecho uso de los mismos, por lo que no es procedente la condena en costas.

2.2.2 PRESENTADO POR COLPENSIONES E.I.C.E.

Interpuso recurso de apelación, frente a los numerales 7 y 9 de la providencia, para en su lugar solicitar se de aplicación a la jurisprudencia de la C.S.J. y se ordene la devolución de los aportes efectuados por el demandante al RAIS debidamente indexados, conforme con la sentencia 31.989 de 2008.

Aunado a lo anterior, solicitó se ordene la devolución de las cuotas de administración debidamente indexadas, teniendo en cuenta el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

2.3 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR PORVENIR S.A.

En primer lugar, en relación a los perjuicios declarados por el a quo, destacó que no se encuentran demostrados en el proceso, por cuanto las simulaciones pensionales no están en un nicho jurídicamente consolidado, aunado a que, no son un derecho adquirido por el demandante pues carece de un reconocimiento de derecho pensional por parte de la AFP en el proceso, ya que para el momento del presente pronunciamiento, este aún se encuentra en construcción. En razón de lo anterior, conforme a la sentencia de la C.S.J. SL 3614 de 2020, consideró que se dio una aplicación indebida a las facultades ultra y extra petita del juez, pues en primer lugar, los hechos que originan la decisión debieron haber sido discutidos en el proceso y, segundo, tales hechos no están debidamente acreditados, incumpliendo así los requisitos para este tipo de casos en concreto.

Resaltó que no existían razones fácticas y jurídicas para declarar la ineficacia del traslado, pues la decisión se tomó de forma espontánea y sin presiones, cumpliendo los requisitos exigidos por la normatividad vigente (artículo 97 del Decreto 663 de 1993), y después de brindar la información necesaria, y obligatoria para la época. Destacó que el accionante no cumplió su deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, más aún, cuando contó con varias oportunidades para trasladarse nuevamente de régimen y no lo hizo, ratificando su interés en mantenerse vinculada al RAIS.

Adujo que la motivación de la parte actora para retornar al RPM, es el carácter económico de la mesada pensional, mismo que no podía ser determinado en el momento en el que se presentó su vinculación, al depender de muchas variables que no eran conocidas en su momento, razón por la cual, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que la sola circunstancia de no cumplirse las expectativas pensionales no puede predicarse como un engaño.

Destacó que la prueba documental que extraña la juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, aunado a que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación surgieron a partir del año 2010 y 2014, por lo que no es cierto que la AFP se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado, y mucho menos debe exigirse su aplicación de manera retroactiva.

Frente a la condena de reconocimiento de pensión de vejez, conforme a los parámetros de RPM, indicó que el a quo está desconociendo que el legislador creó y reguló dos sistemas pensionales, excluyentes entre sí y con formas de reconocimiento y liquidación de prestaciones económicas distintas, aunado a que dicha condena fue producto de las extra limitaciones del juzgador, en tanto en la demanda no se solicitó este pago por parte de la AFP.

Finalmente, con relación a las costas procesales, indicó que no es procedente por cuanto la entidad siempre obró con buena fe objetiva, y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época del traslado.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA.

De acuerdo a lo planteado en los recursos de alzada, el problema jurídico consiste en determinar cuáles son los efectos jurídicos que genera el incumplimiento del deber de información, analizando no sólo si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, examinando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia, sino además establecer la viabilidad de la indemnización de perjuicios, analizando si se acreditó el daño, la responsabilidad de la AFP y el nexo causal, y a su vez si ello cimenta la procedencia del pago de un cálculo actuarial en los términos ordenados por el fallador, determinando además qué haberes le corresponde retornar a Porvenir S.A.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4. CONSIDERACIONES.

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como

consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por el demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 30 de septiembre del 2000, cuando suscribió el formulario de vinculación a Porvenir S.A. (fl. 41 del archivo 06 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la injerencia de su empleador, la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración y por la ausencia de una asesoría integral en donde se indique las características del RAIS, y las ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente el señor JOHN JAIRO TEJADA VELEZ en el aludido interrogatorio manifestó que su grado de escolaridad es de bachiller y que labora como conductor de trenes al servicio de la empresa DRUMMOND LTD. Respecto al traslado a Porvenir S.A., adujo que, trabajando para la cooperativa COONALTEF, el gerente de la empresa y el jefe de personal le indicaron que era una obligación el cambio de fondo de pensiones, por cuanto Colpensiones(sic) se iba a terminar, resaltó que la información fue suministrada mediante una reunión grupal y que tomó la decisión ante la incertidumbre de quedarse sin empleo en caso de no seguir la directriz. Aclaró que el formulario de afiliación le fue suministrado por una asesora de Porvenir S.A., quien le manifestó que era una empresa con más beneficios, que se pensionaría mejor y a una menor edad.

Resaltó que no le hablaron de temas como pensión anticipada y rendimientos financieros.

Adujo que Porvenir S.A. no le brindó asesoría antes de cumplir 52 años de edad, y que la motivación para retornar al RPM, es el sentimiento de engaño al indicarle que el ISS se iba a terminar, y la diferencia en el valor de la pensión.

Destáquese que el deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo indicado por el reclamante dejar ver que no existió información suministrada al momento suscribir el formulario de vinculación al RAIS, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la

versión dada por el accionante, pues se insiste, que no le dieron explicación alguna sobre el funcionamiento del régimen.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto, es decir, en cuanto a la declaratoria de ineficacia, NO así los efectos que de ello derivó el juez.

Y es que aquel considera que el afiliado verá truncado su derecho a disfrutar de una prestación en un monto superior, dado que habría una eventual reducción en la pensión por vejez que recibiría de permanecer en el RAIS, en contraste con aquella ofrecida por el régimen de prima media.

No obstante, al margen de que por sí sólo eventualmente ello pudiese o no acarrear la indemnización de un perjuicio, lo cierto es que NO hay prueba que soporte la veracidad de tal aseveración, ni siquiera un cálculo a título ilustrativo, en contraste con lo que mal o bien, se identifica en los anexos de la demanda respecto al eventual monto que en un futuro percibiría en dicho fondo, ello sin miramientos a la precisión que pudiese tener dicho cálculo dado los errores en el establecimiento y/o cuantificación del IBL de cara a las cotizaciones efectuadas no sólo en el transcurso de la demanda, sino además con posterioridad a la sentencia que, de existir, afectarían cualquier cuantificación primigenia.

Aunado a lo anterior, habrá de señalarse que, en parte alguna, se acreditó que la administradora del RAIS hubiese brindado una errada información al actor al momento de afiliarse, siendo carga de quien aduce un perjuicio, demostrar no sólo su existencia, sino que el mismo está ligado a tal actuar, es decir, ese nexo de causalidad, pues aunque quisiese asimilarse el daño al menoscabo en la tasa de reemplazo, ello no releva de la actividad probatoria que en tal sentido se debe desplegar, actividad que precisamente NO ejecutó porque NO era una pretensión.

Y es que la ineficacia aquí declarada, no deviene de tal hecho, es decir, del actuar negligente de la entidad, ni de que se hubiese configurado un error de hecho en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa como vicio en el consentimiento, tal ineficacia nace de la omisión de la AFP en cuanto a no cumplir la carga de la prueba que el precedente judicial ha radicado en cabeza suya, es decir, se cimenta en el hecho de que el fondo no demostró la calidad de la asesoría que en su momento brindó al afiliado.

Así las cosas, si se desconocen los pormenores de la misma, no puede tildarse de indebida o irregular, por lo que el eventual perjuicio que aduce el fallador, partiendo de la idea que se hubiese demostrado un daño, no puede indefectiblemente desprenderse de tal asesoría en la que el demandante decidió

trasladarse de régimen, asesoría cuyo contenido integral se desconoce, pues lo dicho por el accionante en el interrogatorio de parte absuelto, tiene como finalidad provocar una confesión, no acreditar un hecho.

En todo caso, aunque tal tesis no fuera de recibo, a igual conclusión llegaría esta Magistratura.

Y es que realmente se torna innecesario entrar en disquisiciones puntuales en torno a la acreditación o no de un eventual perjuicio respecto del futuro pensional de un afiliado, toda vez que aunque pudiesen resultar interesantes los planteamientos del a quo, lo cierto es que son otras las consecuencias que nuestro órgano de cierre ha derivado en este tipo de asuntos, el que propende por la declaratoria de ineficacia junto con el retorno de ciertos haberes como más adelante se pasará a explicar, de ahí que siguiendo este precedente consecuentemente se entienda que la persona permanece en el régimen primigenio, siendo Colpensiones y no otra entidad la encargada de asumir el reconocimiento integral de la futura prestación por vejez en caso de acreditarse el cumplimiento de los requisitos que contempla la ley.

Y es que la aludida ineficacia realmente implica es que la administradora del RAIS accionada, traslade a COLPENSIONES **todos** los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, de lo contrario Colpensiones no estaría recibiendo la totalidad del dinero que se debe retornar conforme el claro precedente sentado por nuestro órgano de cierre, punto en el que se **REVOCARÁ** la decisión adoptada por el a quo, y en su lugar, se ordenará que el traslado de estos conceptos este a cargo de Porvenir S.A.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de

administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que *«las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder»*, debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal

correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasarán al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la INDEXACIÓN de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **ADICIONAR** el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregados a Colpensiones E.I.C.E. debidamente indexado por parte de Porvenir S.A. teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

La Sala de Casación Laboral también se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltese las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, la administradora del RAIS accionada deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que también se **ADICIONARÁ** el fallo.

En tal sentido, deberá **REVOCARSE** la orden del fallador en cuanto a la declaratoria de causación de un daño por parte de Porvenir S.A., y consecuencialmente todo lo atinente al pago del cálculo actuarial/título pensional a título de indemnización por perjuicios.

PENSIÓN VEJEZ.

Bastará con decir que al no surtir efectos el traslado, se entiende que para el señor TEJADA VELEZ es dable acceder a la pensión de vejez de acuerdo a los parámetros que para el efecto reguló la Ley 797 de 2003, que exige el cumplimiento de 62 años en el caso de los hombres, además de 1.300 semanas cotizadas al sistema.

Lo anterior por cuanto el demandante nació el 29 de mayo de 1959, conforme se aprecia en la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 29, del archivo 04 del expediente digital, cumpliendo 62 años el mismo día y mes del año 2021, y aunque NO obra en el plenario el Registro Civil de Nacimiento, aquel dato sí es coincidente con el que aprecia en la restante documentación, incluso incorporada por Porvenir S.A, entre ellas la Historia Laboral (fl 4, archivo 06 del expediente digital), e inclusive en la Certificación No. 112842022 emitida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones E.I.C.E. visible a folio 1 del archivo 16 del expediente digital, entidad que por demás, mediante Concepto 4273229 de 2013² reconoció que la cédula era un documento idóneo para acreditar la edad al momento de reclamar este tipo de prestaciones económicas.

En cuanto a la densidad tenemos que, de acuerdo con la Historia Laboral allegada por Porvenir S.A. (fl 4, archivo 06, expediente digital), el demandante cotizó un total de 1.316 semanas, superando así el requisito de las 1.300 exigidas por la Ley 797 de 2003, de ahí que la fecha de causación correspondió al momento en que el accionante arribó a la edad.

De otro lado, en cuanto al **DISFRUTE**, se ha considerado que éste se da cuando una vez reunidos los requisitos, el afiliado solicita a la entidad administradora de pensiones el reconocimiento de la misma y se ha dado el retiro o desafiliación del sistema, pues para la liquidación de la prestación se debe

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

tener en cuenta hasta la última semana cotizada, ya que mal se haría en reconocer un retroactivo sobre unas semanas que efectivamente sirvieron de base para el cálculo de la prestación.

Así las cosas, basta con verificar la desafiliación o retiro del sistema, hecho que no sólo se prueba con el reporte expreso de la novedad de retiro, sino que también en algunos casos donde el afiliado deja de cotizar pero omite reportar formalmente su retiro, el hecho del que inequívocamente se infiere la voluntad de desafiliarse es la presentación de la reclamación tendiente al reconocimiento de la pensión, lo que constituye una manifestación indiscutible de la voluntad de cesar el pago de sus cotizaciones para empezar a disfrutar de la pensión.

De ahí que tal prestación esta llamada a disfrutarse a partir del día siguiente a la última cotización efectuada al sistema, hecho del que no existe certeza en el plenario, toda vez que la Historia Laboral obrante de folios 4 a 18 del archivo 06 del expediente digital, si bien refleja una última cotización para el ciclo de octubre de 2019, ello lo es porque fue impresa en data cercana a tal fecha (fecha de generación 06/12/2019), aunado a que, conforme a lo indicado en el interrogatorio de parte, el accionante resaltó que seguía laborando al servicio de la empresa DRUMMOND LDT, hasta tanto se resuelva su situación jurídica.

Así las cosas, como NO existe certeza del último aporte del accionante al sistema, se mantendrá la condena respecto al reconocimiento de la pensión de vejez, cuya liquidación le corresponde a la administradora del régimen de prima media en atención a lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 100 de 1993, DISFRUTE que se sometió a la verificación por parte de Colpensiones del reporte de la novedad de retiro o cesación de cotizaciones, hecho del que no existe constancia en el expediente, por lo que se **MODIFICARÁ** la decisión de primera instancia en este punto.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE** en cuanto a la declaratoria de ineficacia, **revocándola, modificándola y adicionándola** en los aspectos antes aludidos.

Sin costas en esta instancia, dado que las partes que apelaron tuvieron éxito parcial en el recurso, pues, entre otros, su disenso se enfocó en los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado bajo los criterios esbozados por el a quo.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 17 de abril de 2023 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **JOHN JAIRO TEJADA VELEZ** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 3.446.965 contra **PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E.**

SEGUNDO: REVOCAR la declaratoria de causación de un daño por parte de PORVENIR S.A. y consecuencialmente todo lo atinente al pago del título pensional/cálculo actuarial con ocasión a una indemnización por perjuicios y el otorgamiento de la pensión de vejez en los términos estipulados para el régimen de prima media.

TERCERO: MODIFICAR el fallo de primera instancia, considerando:

- a) **DECLARAR** la **INEFICACIA** de la afiliación del demandante al RAIS administrado por PORVENIR S.A., entendiéndose que estuvo válidamente afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES E.I.C.E., sin solución de continuidad.
- b) En consecuencia, de lo anterior, se **CONDENA** a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES E.I.C.E todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del demandante desde el cambio de régimen, tales como, aportes consignados en la cuenta de ahorro individual y los rendimientos financieros, junto con sus frutos e intereses.
- c) **CONDENAR** a PORVENIR S.A., a trasladar con cargo a su propio patrimonio, los 3 ítems que componen los gastos de administración., como lo son: costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, sumas que serán debidamente **INDEXADAS** por dicha administradora del RAIS al momento del pago, oportunidad en la que además **deberá discriminar** los conceptos entregados a COLPENSIONES E.I.C.E., detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia, último punto en que se **adiciona** la providencia.
- d) Se **ORDENA** a COLPENSIONES E.I.C.E. recibir los dineros trasladados, reflejando en la Historia Laboral la **totalidad** de cotizaciones realizadas por el demandante al régimen pensional.

CUARTO: MODIFICAR el fallo de primera instancia, bajo el entendido que COLPENSIONES E.I.C.E, reconocerá al señor JOHN JAIRO TEJADA VELEZ la prestación económica de vejez, con arreglo a lo establecido en la Ley 797 de 2003, al acreditar 62 años de edad y más de 1.300 semanas cotizadas al sistema general de pensiones, entidad que supeditaré el disfrute de la prestación económica a la

fecha del reporte de la novedad de retiro, o la de cesación efectiva de cotizaciones, conforme se indicó en la parte motiva de la providencia.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	JOHN JAIRO TEJADA VELEZ.
Demandado:	COLPENSIONES E.I.C.E. Y PORVENIR S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-003-2019-00592-01.
Tema:	ineficacia traslado.
Decisión:	CONFIRMA, REVOCA Y ADICIONA SENTENCIA.
Fecha de la sentencia:	27/09/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 28/09/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario